

rez.—M. Auzá.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Son copias que certifico. México, Junio nueve de mil ochocientos setenta y uno.—Agustín Peralta, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por el C. Manuel Díaz Miron en representación de los Sres. Velazco hermanos, contra las providencias de la Aduana principal de Rentas de esa capital, relativas al embargo de bienes que les hizo en uso de la facultad económico-coactiva, para obligarlos al pago de la contribucion establecida por el decreto núm. 66 del Estado, que los quejosos califican opuesto al art. 124 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que los Sres. Velazco hermanos de este comercio, por medio de su apoderado, han intentado el recurso de proteccion y amparo contra las providencias dictadas por la Administracion principal de Rentas de esta ciudad, relativas al cobro que les hizo de las contribuciones que establece el decreto núm. 66 de 12 de Diciembre de 1870, con violacion de garantías individuales; y corrido los trámites regulares de este juicio con la conveniente recepcion de las pruebas que conducen á justificar los hechos que en él se reservan, en cumplimiento del auto de 2 de este mes, ha examinado detenidamente las actuaciones para producir este pedimento, sujetándose en un todo á los hechos

demostrados y probados, así como á las leyes vigentes en el caso.

Los promoventes de este recurso se fundan esencialmente en que el impuesto que se les ha cobrado, empleando para el efecto la facultad coactiva que la ley concede al funcionario exactor, hasta el extremo de haberse procedido al embargo de bienes para dejar asegurados los intereses de la Hacienda pública, y dándose cuenta en seguida al Juzgado respectivo de 1ª instancia para la continuacion del procedimiento, es alcabala que se halla abolida por el art. 124 de la Constitucion federal, y al exijérseles, en virtud del decreto ya citado de la II. Legislatura, se infringen los art. constitucionales que les aseguran su propiedad particular, habiéndoselos violado esa garantía con el hecho mismo de haberseles atacado en el embargo practicado sin justo ni legítimo motivo, aduciendo además en su favor, otras razones que creen favorecerles.

El suscrito Promotor encuentra infundada la solicitud, porque segun aparece de los autos y es de pública notoriedad, el art. referido 124, no ha estado en observancia desde la fecha en que se promulgó la Constitucion hasta la presente, supuesto que tanto el Soberano Congreso nacional, como la II. Legislatura de este Estado y las de la mayor parte de los Estados de la República, han continuado sosteniendo el sistema tributario de alcabalas en sus distintos ramos y por consiguiente permanecen hasta hoy establecidas las Aduanas interiores, así del Distrito federal como de los Estados con el nombre de Administracion de Rentas; y mucho menos porque las contribuciones á que se contrae el citado decreto, unas son de alcabalas por el diez y medio por ciento que deben pagar el aguardiente y los licores de todas clases y otras de derecho de consumo por el real en arroba que deben pagar la azúcar y medio real la panela y miel prieta, siendo de esta última clase la que pueda estable-

cerse sin obstáculo alguno por los Estados, por no haber prohibicion en las leyes generales que se los estorbe, atendido lo dispuesto en el art. 117 de la Constitucion federal, por cuya razon la Administracion de Rentas, cita en apoyo de la legalidad de ese impuesto dos ejecutorias, que en otros juicios de amparo han sido expedidas por la Suprema Corte de Justicia, la una en Noviembre 12 de 1868 y la otra en 3 de Febrero de este año, por las cuales se resolvió que no se amparaba al Lic. D. Rodolfo G. Canton y á Francisco Diego contra las providencias de la Tesorería General del Estado de Yucatan, en cuanto al cobro que les hizo de medio por ciento de derechos de consumo, por haber usado de su derecho la Legislatura al imponerlo, supuesto que no le está prohibido por las leyes generales.

Y en cuanto á las alcabalas, es de observarse que han estado en todo su vigor y fuerza, no obstante lo dispuesto en el art. 124 mencionado, porque si bien en él se previno que quedaran abolidas para el dia 1º de Junio de 1858, lo mismo que las Aduanas interiores en toda la República, no es menos cierto que cumplido ese plazo no se estableció el sistema tributario directo sino acompañado del otro, ya porque en muchos Estados lo mismo que en el Distrito federal no fué posible poner en observancia aquella prescripcion fundamental, por la multitud de causas que han influido y contribuido poderosamente á su inobservancia, ya porque en las diversas ocasiones en que el ejecutivo de la Union ha estado investido de facultades extraordinarias para conservar el órden público, las instituciones y la independencia de la nacion, ha sido preciso conservar el mismo sistema, porque para variarlo, era indispensable toda aquella madurez, circunspeccion, prudencia y tacto que se requieren para el buen desempeño de la Administracion pública, mayormente cuando los pueblos están mas inclinados á satisfacer las

alcabalas, que la otra clase de contribuciones directas; de modo que esa ha sido una de las razones de mas peso que seguramente han tenido los legisladores, así de la Nacion como de los Estados, para ir aplazando sucesivamente la observancia del mencionado artículo constitucional.

En prueba de esta verdad, fué expedida en 12 de Setiembre de 1857 la ley general de clasificacion de rentas, y en ella se prevenia que correspondian á la Nacion y á los Estados por mitad de derecho de traslacion de dominio impuesto por la ley de 13 de Febrero de 1856, disponiendo en sus demás fracciones del art. 2º y del 3º, las demás contribuciones de alcabalas que correspondian á la Nacion y á los Estados.

Posteriormente se expidió la ley general de 16 de Diciembre de 1861, que estableció la contribucion federal y dictó reglas para cobrar el derecho de contraregistro en el lugar del consumo de los efectos, previniendo terminantemente en su artículo 8º: "Que las rentas de alcabala en el Distrito y territorios continuará hasta que el Congreso decreta la cesacion de ellas, en vista de que lo permita el estado del Erario federal." A este ejemplo, las Legislaturas de los Estados en su mayor parte han seguido observando la misma conducta con excepcion de tres á cuatro que han podido plantear el sistema tributario directo, suprimiendo el indirecto, de manera que segun se vé, en este Estado de Veracruz sucede lo mismo que en los demás, porque se están cobrando las alcabalas y las contribuciones directas, y apesar de eso, no tiene lo suficiente para llenar cumplidamente su presupuesto de egresos, y se trata ahora, como es bien sabido, de procurar establecer su hacienda en las mejores condiciones que sea posible, para dejar cumplida la prevencion del citado artículo 124 de la Constitucion federal.

Ya en otra ocasion, con motivo de la controversia suscitada sobre el derecho de

traslacion de dominio, que es una verdadera alcabala, entro una casa de comercio de esta ciudad y la Tesorería general del Estado, se decidió por el Juzgado de Distrito que debia cobrarse para la nacion y para el Estado, por ser un caso anterior á la ley de presupuesto de ingresos de 1868, que lo abolió para el Erario federal, cuyas actuaciones en lo conducente están agregadas á estos autos.

En ellas se encuentran todas las razones fundamentales, apromiantes y poderosas que se tuvieron presentes para dictar aquel fallo que consideró en desuso el artículo 124, ya repetido, y esas razones son tambien aplicables al caso presente por la analogia que tiene con aquel, no obstante que allí se trató de una controversia de distinta naturaleza, porque en ambas se versa un mismo punto de derecho.

En conclusion debe decir el infrascrito, que en su humilde opinion, la letra de aquel artículo no está en vigor hasta que el soberano Congreso nacional y las demás legislaturas de los Estados acuerden lo conveniente, y por lo mismo, de hecho puede decirse que está reformado por la voluntad tácita de la nacion, por medio de sus representantes.

Y como en este caso no puede admitirse como procedente el amparo que se pide porque es enteramente excepcional de los demás que ocurren con frecuencia, es indudable que debe declararse sin lugar.

Tambien consta de autos por la declaracion que en forma emitió el cobratario de la Administracion de Rentas C. Leandro Egea y el informe producido por el C. Tesorero general del Estado, que los Sres. Velazco Hermanos estuvieron conformes en el pago de las contribuciones de que ahora se trata, por cuyo motivo la oficina recaudadora les permitió que depositaran en sus almacenes particulares y dispusieran de los efectos que las habian causado, mientras se formaba la liquidacion de su importe para su pago, y que no habiéndolo verificado

cuando se hizo el cobro, fué necesario por su resistencia hacer uso de la facultad económico-coactiva, de lo que resulta: que no solamente no han tenido razon para solicitar el amparo, sino que no ha habido la violacion de garantias de que se quejan, porque con arreglo al artículo 15 se verificó el embargo en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, con fundamento y motivo de la causa legal del procedimiento; ni menos de la que otorga el artículo 27 en favor de la propiedad de las personas, porque no se trata ahora de ocuparla para expropiarla en los casos previstos en el citado artículo, sino para el pago de una deuda que debe satisfacerse.

Por cuyos fundamentos, no es procedente el amparo solicitado, y los peticionarios en consecuencia, deben satisfacer la multa que les impone el artículo 15 de la ley de 20 de Enero de 1869; y concluye el infrascrito pidiendo al Juzgado se sirva pronunciar su fallo en esos términos, con arreglo á las prescripciones del artículo 101 y 102 de la Constitucion federal y relativos de la citada ley de 20 de Enero.

H. Veracruz, Mayo diez de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. J. M. Lopez Escalera* una rúbrica.

Sentencia del Juez de Distrito.

H. Veracruz, Mayo diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por el C. Manuel Diaz Miron, en representacion de los Sres. Velazco hermanos, contra las providencias de la Administracion principal de Rentas de esta Capital, relativas al embargo de bienes que les hizo en uso de la potestad económico-coactiva para obligarlos al pago de la contribucion establecida por el decreto núm. 66 del Estado, que los quejosos califican de opuesto al artículo 124 de la Constitucion federal y

en cuya virtud dicen que se han violado en su persona y bienes las garantías consignadas en los artículos 16 y 17 de la misma Constitución. Visto el auto de 3 de Abril último en que con presencia del informe que produjo la oficina ejecutora, se declaró sin lugar la suspensión inmediata de la providencia reclamada, teniéndose en consideración para negarla, la falta de urgencia en primer lugar; segundo, que el perjuicio que los promoventes resintieran por el embargo de sus intereses, sobre no ser irreparable, porque en definitiva las cosas se pudieran restituir, estaba en la facultad de aquellas evitarlo pagando lo que se les mandaba; y finalmente, que el erario no podía pelear despojado conforme á las leyes y doctrinas que así lo establecen. Visto el informe justificado que posteriormente rindió la referida Administración principal, con arreglo á lo prevenido en el artículo 99 de la ley de 20 de Enero de 1869, en el que reprodujo las razones que en el anterior tiene vertidas, y en cuanto á lo sustancial del recurso, se reducen á que resistiendo los Sres. Velazco hermanos al pago de la contribución impuesta por el decreto núm. 66 del Estado, consintieron después en hacerlo siempre que los frutos que fueran introducidos no se condujeran á los almacenes de la oficina como se había dispuesto por ésta, continuando por virtud de esa oferta, el consentimiento de que los efectos de su propiedad se despacharían previos los requisitos de ley por el celador de servicio en la puerta por donde hicieran su entrada; pero que el 27 de Febrero mandó efectuar el pago que no quisieron verificar dichos Sres. apesar de habérseles observado su oposición á la ley, y por ésta razón ordenó sus procedimientos de embargo que ejecutó hasta dar cuenta con ellos al Juez competente, obrando en todo con sujeción al decreto general de 20 de Noviembre de 1838 y su Reglamento.

Vistas las pruebas rendidas en el curso del negocio: los informes emitidos por los

ciudadanos Administrador de la Aduana Marítima de este puerto y Tesorero general del Estado, para el mejor esclarecimiento de los hechos, y la comunicación de la secretaría de la Legislatura del mismo, en que se trascribe el acuerdo de ese II. cuerpo, recaído al oficio que le dirigió este Juzgado para que tuviera á bien informar sobre los motivos que hubieran impedido el establecimiento del sistema de contribuciones directas, á fin de dejar satisfecho el art. 124 de la Constitución, y en que dispuso, no obstante la gravedad del negocio y lo oportuno y conveniente de su informe, que solo se requería con el fin de ilustrar la cuestión, no acceder á lo solicitado, porque informar sobre el particular, importaba el que sus actos quedaran sometidos al juicio y calificación de este Juzgado de Distrito. Visto lo alegado por el C. Promotor fiscal y por el apoderado de los promoventes con todas las demás constancias de autos. Considerando: que el decreto que se objeta de inconstitucional, por el hecho de gravar los productos de la caña en los términos que tuvo á bien disponer la II. Legislatura del Estado no merece esa calificación, porque en verdad, los derechos en él asignados, no son otra cosa que derecho de consumo que no puede confundirse con el de alcabala, para los fines que pretende la parte quejosa; pero aun cuando merecieran esta consideración, no por eso se debería reputar el citado decreto en el caso de infracción del art. 124 de la Carta fundamental; porque en su favor, militan poderosas razones que justifican la subsistencia de los impuestos indirectos: Que si se atiende á lo preceptuado en el art. 117 de la Constitución federal, los Estados tienen facultad para imponer dentro de su comprensión el derecho de consumo, y aunque tal facultad pudiera ponerse en duda, atendidos los términos generales al citado artículo en punto á las facultades reservadas á los Estados en los casos que no están expresamente concedidos á los funcionarios

federales, esa duda no puede subsistir en vista de la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de 12 de Noviembre de 1868 y 3 de Febrero último, que en iguales recursos que el presente, promovidos ante el C. Juez de Distrito de Yucatan contra el C. Tesorero general del Estado, el uno por el C. Lic. Rodolfo G. Canton y el otro por el C. Francisco Diego, ambos por el cobro que les hizo del medio por ciento de derecho de consumo, declaró: que no amparaba á los expresados contra las providencias de la Tesorería, por haber usado de sus facultades la Legislatura de aquel Estado, al decretar el impuesto dicho, que no le estaba prohibido por las leyes federales. Que en esta virtud, el Estado de Veraacruz ha expedido rectamente el derecho de que se ha hecho referencia, pues estaba en sus facultades hacerlo, y el cual, no importa otra cosa que el restablecimiento de una contribucion que habia sido derogada por el decreto de 15 de Agosto de 1869, y no alcabala abolida por el art. 124 de la Constitución general. Considerando: que la mente que el legislador se propusiera al suprimir las alcabalas, prescindiendo de la idea de mejorar el estado de la Hacienda pública por un cambio de sistema de sus impuestos, sin duda no fué otra, que la abolición del sistema tributario que desde su origen venia envuelto en un espíritu vejatorio y opuesto por lo mismo al que inspirara á los legisladores de 1857 las nobles instituciones contenidas en la Carta fundamental, cuyo espíritu nunca se puede juzgar contrariado por el sistema de alcabalas, que, circunstancias extraordinarias para la República, no han permitido abolir hasta hoy. Que como es notorio el precepto relativo de dicho Código, desde la fecha que éste se sancionó, no ha estado en observancia si se atiende á que, así el Soberano Congreso de la Union como las Legislaturas de casi todos los Estados de la República, han sostenido las alcabalas en distintos ramos, permanecien-

do hasta hoy las Aduanas interiores bajo la denominacion de Administracion de Rentas; y que si bien se previno que aquel impuesto quedara abolido para el 1.º de Junio de 1858 y cesaran tambien las Aduanas, era una verdad que á esa fecha continuaron subsistiendo unas y otras, y cuando se estableció el sistema directo, fué acompañado del otro, ya porque en muchos Estados lo mismo que en el Distrito federal causas poderosas impidieron la observancia del artículo constitucional, como porque el ejecutivo de la Union se vió en la necesidad de conservar el antiguo sistema, cuyo cambio no era dable en las circunstancias críticas y extraordinarias que ha atrozado la República desde el año de 1858, por los graves trastornos que ha sufrido desde esa fecha la paz pública. Que siendo el precepto á que se alude, una regla de futuro que señala tiempo, en ninguna manera es de suponerse que el legislador quisiera su estricta observancia al vencimiento de ese término, sin proveer antes de recursos á la Hacienda pública, pues lo contrario fuera pretender que se envolviese el país en los males consiguientes á la supresion violenta de sus antiguos impuestos, sacrificándose así el bien público al cumplimiento literal de un precepto, que de cualquiera manera que se considere, supone términos hábiles para su observancia, procediendo de aquí que casi ningún Estado haya suprimido las alcabalas; y si en algunos se ha decretado su cesación, la necesidad los ha colocado despues en el caso de restablecerlas, por lo que se vé que no han incurrido en una verdadera infraccion de la Constitución y que el cumplimiento de su art. 124 se ha venido aplazando conforme la situacion anormal del país lo ha exigido. Que si no ha recaído una prevencion expresa del legislador sobre este punto, sí ha mediado un consentimiento tácito de los representantes de la Nación, que nada han declarado contra lo que se practica generalmente en el cobro

de alcabalas, convencidos como están de la imposibilidad de poner en vigor el mencionado artículo. Que en comprobación de este aserto, es de tenerse presente la ley general de 12 de Setiembre de 1857, que determinó las alcabalas que correspondían á la Nación y á los Estados; y la de 15 de Diciembre de 1851, que estableciendo la contribucion federal, dictó reglas para cobrar el derecho de contra registro en el lugar de consumo de los efectos, disponiendo en su art. 8º que la renta de alcabalas en el Distrito y territorios, continuará hasta que el Congreso de la Union decretara la cesacion de ellas en vista de lo que permitiese el estado del erario, cuya conducta ha normado la de los Estados, para hacer el cobro de alcabalas al propio tiempo que de las contribuciones directas. Que por la analogía que la cuestion presente tiene con la controversia decidida por este Juzgado, sobre aplicacion de las leyes federales de 13 de Julio de 1859 y 29 de Mayo de 1868, tratándose de que el erario percibiese una alcabala que se le denegaba, son de tenerse presentes los fundamentos de la ejecutoria pronunciada en 22 de Diciembre de 1868, por venir en apoyo de la justificacion con que procede el cobro de los impuestos indirectos sin barrenar por eso al Código fundamental que en una de sus prescripciones ha querido abolirlos. Considerando por último: que los procedimientos de la Aduana principal de Rentas de esta Capital, segun se vé del acta de fojas 14 y demás constancias relativas, se encuentran ajustados á la ley que demarca al gefe de dicha oficina sus deberes, no resultando de ellos la violacion de garantías de que se quejan los Sres. Velazco hermanos, porque al embargo de sus bienes ha precedido mandamiento de autoridad competente, que lo es el gefe de la Administracion, fundado tambien en causa bastante como lo fué la resistencia á satisfacer una deuda justa al erario, y por tanto, ni en la persona ni en la propiedad de los ex-

presados se ha usado de otros apremios que los legales, siendo por todo lo dicho, improcedente el amparo que han solicitado. Por tales consideraciones, y con fundamento además de lo dispuesto en los art. 13 y 15 de la ley de 20 Enero de 1869, se declara:

Primero: la justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. Velazco hermanos, contra las providencias y actos de la Administracion principal de Rentas de esta Capital, en virtud de las cuales les apremia y estrecha al pago de los impuestos señalados en el decreto núm. 66 expedido por la H. Legislatura del Estado en 21 de Diciembre del año próximo pasado.

Segundo: se condena á los Sres. Velazco hermanos, por la interposicion de recurso improcedente, en la multa de doscientos pesos.

Tercero: hágase saber esta sentencia á quienes corresponda, publíquese en el periódico oficial del Estado, sáquense las copias que previene la ley para el *Semanario Judicial*, y elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia.

Lo decretó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado.—*P. Mendizábal Ortiz*.—una rúbrica.—*A. Eduardo J. Castro*.—una rúbrica.—*A. Antonio Loreda*.—una rúbrica.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 6 de 1871.

Visto el Juicio de amparo que en 27 de Marzo de este año promovió ante el Juez de Distrito de Veracruz el C. Manuel Diaz Miron, como apoderado de los Sres. Velazco Hermanos del comercio de esa Ciudad, contra las providencias de la Administracion principal de rentas de la misma, sobre embargo de bienes que en uso de la potestad económico-coactiva man-

dó practicar, obligando á dichos comerciantes al pago de la contribucion establecida sobre el aguardiente y la azucar, por el decreto número 66 del Estado, la cual dicen los quejosos que es una alcabala, y como tal, un impuesto contrario á lo prevenido en el art. 124 de la Constitucion federal, y en su cobro y apremio para su pago, una violacion de la garantía de la propiedad, otorgada por ese código: Visto el informe de la autoridad responsable; las pruebas presentadas por la parte promotora; las recibidas á solicitud del Promotor fiscal; lo alegado por la primera; lo pedido por el segundo; y la sentencia del Juez de Distrito, con todo lo demás que de autos consta y ver convino. Considerando: que el art. 124 de la Constitucion federal, que prescribió la abolicion de las alcabalas y aduanas interiores de la República, supone como condicion natural el previo establecimiento de los impuestos necesarios para organizar la hacienda pública, remplazando las alcabalas, y la expedicion de la ley ó leyes indispensables para hacer efectiva la prevencion constitucional, la cual en consecuencia no puede considerarse violada mientras no se llenen esas condiciones. Por lo expuesto, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del referido Juez de Distrito de Veracruz, pronunciada en 18 de Mayo último, solamente en la parte que dice: "La Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. Volazco Hermanos contra las providencias y actos de la Administracion principal de rentas de esta capital, en virtud de los cuales les apremia y estrecha al pago de los impuestos señalados en el decreto num. 66, expedido por la H. Legislatura del Estado en 21 de Diciembre próximo pasado."

Devuélvanse sus actuaciones al repetido Juez de Distrito, con testimonio de este auto para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que

formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada*.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Arteaga*.—*J. M. Lafraqua*.—*P. Ordáz*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. Auza*.—*L. Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramirez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México Junio diez de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

CIVIL.

Autos promovidos ante el Juzgado de Distrito de Puebla por las Sras Monterde y D. Manuel Riquelme, deduciendo derechos á los bienes de la ex-religiosa sor Blasina de San Antonio.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor dice: que á virtud de las leyes que nacionalizaron los bienes que manejaba el clero, se presentaron las Sras. D^{as} Dolores y D^a María de Jesus Monterde, por medio de su apoderado D. Agapito Fernandez, haciendo igual presentacion D. Rafael Riquelme, por sí y á nombre de sus hermanos, D. Luis y D. José, todos deduciendo derecho á los bienes que en su testamento dejara sor Blasa Josefa de San Antonio, religiosa que fué del convento de Santa Clara de esta ciudad; por cuanto á que dichos bienes deben pasar en su concepto, á los parientes consanguíneos de la monja, por no haber tenido efecto las disposiciones piadosas que en dicho testamento se previenen, y por cuya causa no deben entrar al dominio de la nacion.

En este estado se pasaron los autos al suscrito para que pidiese lo que tuviese por oportuno á su representacion, por lo que el que habla fué de sentir en su pedimento de